

La reconversión industrial también afecta al sector educativo

Leticia Campos *

Política anticrisis

Actualmente, es difícil que se dude de la existencia de la crisis que vivimos. El desenvolvimiento anárquico, irracional e inestable de la economía mexicana en los últimos años ha contribuido mucho a ello. Asimismo, hay una mayor comprensión por parte de la población trabajadora acerca de la gravedad de la crisis y de su carácter general en el sistema capitalista.

Es evidente que la crisis ha afectado la estructura productiva del sistema, las relaciones de producción, el sistema monetario-financiero, las relaciones entre países y la división internacional del trabajo, en donde la mayor desventaja corresponde a los países subdesarrollados y estructuralmente dependientes como México. No obstante la severa agudización de la crisis en los últimos años, la existencia de ésta desde la década de los setenta, da cuenta que la crisis no es coyuntural sino de largo plazo.

En nuestro país la crisis se manifiesta, particularmente, a partir del segundo semestre de 1981, cuando bajan los precios del petróleo a nivel internacional y la depresión, que ello conlleva, obliga a su vez a mayores cambios en la política del Estado, en la estructura social y en la lucha de clases. Sobre todo, si se considera que las caídas cíclicas son más prolongadas y los llamados "auges" más cortos e inestables. Aunado a lo anterior, problemas como la inflación, el desempleo y la sobreacumulación de capital son problemas ya crónicos que acompañan al ciclo productivo a todo lo largo del mismo.

Una característica particular de la actual crisis de largo plazo, es la incapacidad del Estado para enfrentar la: los diferentes planes y programas que, en lo concreto, el gobierno de Miguel de la Madrid ha llevado a cabo, dan cuenta precisamente de la incapacidad del Estado y de la clase dominante para darle salida a la grave crisis que vivimos. Ni el Plan Nacional de Desarrollo (PND), ni el Programa

Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), ni el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC) y, menos aún, el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), han logrado reactivar la economía aunque sí han sabido aprovechar el sacrificio de los trabajadores. Específicamente, el Pacto de Solidaridad Económica ha castigado y congelado los incrementos salariales de los trabajadores y aumentado el desempleo, sin haber logrado combatir la inflación en forma consistente, de acuerdo con los niveles previstos.

El Pacto de Solidaridad Económica es un plan de choque que ante la coyuntura política surge, fundamentalmente, con fines electorales. No es extraño entonces que, recientemente, a punto de llegar a su fin la campaña presidencial en el país, el propio presidente De la Madrid señale en Chihuahua que:

"El Pacto de Solidaridad Económica (...) entra a la etapa más difícil y en el futuro tendrán que ajustarse al alza ciertos artículos. Pero, para mantener reducidos los índices generales de precios, será necesario bajar otros". (Enumeró los problemas estructurales de la economía y dijo que) "(...) en caso de no superarse, será difícil abatir la inflación y persistirá el riesgo del repunte".¹

Unos días después Fidel Velázquez, Secretario General de la CTM, señaló que:

"El Pacto de Solidaridad Económica está a punto de fracasar por los abusos de los comerciantes que violan el compromiso signado y elevan los precios y también por la actitud de disimulo de las autoridades de comercio, al permitir las alzas".²

Lo cierto es que el esperado sueño de industrializar a nuestro país para que éste compita con los países más desarrollados del mundo, se aleja cada vez más en el

marco de esta política económica, cuyo objetivo es responder a las necesidades del capital monopolista que opera en el país. Ya Agustín Legorreta, empresario mexicano miembro de la oligarquía financiera, (capa más alta de la burguesía y también la más entreguista), admitió, que el Pacto de Solidaridad Económica responde a las necesidades de 300 empresarios.³ Aunque le faltó agregar que estos 300 empresarios están subordinados al igual que el Estado, al capital monopolista extranjero, en particular, el norteamericano. Y es a este último al que más caso le hace el Estado mexicano a través de los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

No es gratuito que la estrategia del Estado, sobre todo a partir de 1982, y no sólo a partir del Pacto de Solidaridad Económica, se base en lo siguiente:

- a) Abrir la economía mexicana en mayor grado que antes al capital extranjero.
- b) Impulsar las maquiladoras.
- c) Disminuir la protección a la planta productiva del país, de ahí la incorporación de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (AGAAC).
- d) Fomentar las exportaciones de manufacturas y de productos primarios con alta demanda en los países desarrollados.
- e) Disminuir y eliminar subsidios para acabar con los precios "ficticios".
- f) Avanzar en la venta o liquidación de empresas paraestatales para disminuir la presencia del Estado en la estructura productiva del país.

El problema del subdesarrollo y la dependencia estructural en nuestro país no es un problema sencillo a vencer. En la agudización de la crisis que padecemos ha jugado un papel central la revolución científico-técnica, pues conlleva un significativo aumento de la productividad

* Investigadora del Seminario de Teoría del Desarrollo del IIEc, UNAM.

¹ *La Jornada*, 4 de junio de 1988, pp. 1 y 6.

² *La Jornada*, 8 de junio de 1988, p. 30.

³ Cf. *La Jornada*, 31 de mayo de 1988, p. 9.

a través de nuevos y más modernos medios y procesos de producción, lo que profundiza la desigualdad entre ramas y genera desempleo en las más avanzadas. El poderoso avance de la tecnología incide a nivel mundial rezagando cada vez más a unas economías respecto de otras.

La desigualdad del sistema capitalista se acentúa debido a que el proceso de reestructuración del sistema productivo en el capitalismo impone cambios en la división internacional del trabajo. Los países subdesarrollados y dependientes, como el nuestro, se han vuelto receptores de algunas actividades tradicionales (en crisis en los países desarrollados) y de ramas con baja intensidad de capital. Lo que necesariamente lleva a un ajuste y a una recomposición de las estructuras productivas del país.

Reconversión industrial y reforma universitaria

Las reformas educativas y universitarias propuestas por el rector Jorge Carpizo, en octubre de 1986, responde al papel que dentro de la reestructuración capitalista deberá cumplir el sector educativo. Estrategia general que fue plasmada en el Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (PROIDES).

Se trata de que el Sector educativo, particularmente, de nivel superior responda a los cambios estructurales requeridos para impulsar el desarrollo del país. Particularmente ante el alto aumento de la matrícula estudiantil en el último cuarto de siglo, causa, según esto, del descenso de la calidad de la enseñanza, el Programa considera necesario lo siguiente, en opinión de la revista *Estrategia*:

[...“reorientar el crecimiento de la educación superior”; se propone “alentar el crecimiento de la matrícula en las ciencias naturales y exactas, las ingenierías y tecnologías, así como las humanidades”. En cambio desalentará la inscripción en las áreas administrativas, contables, jurídicas y médicas. Por otra parte, “se procurará orientar el flujo escolar hacia otras opciones de formación terminal de nivel medio superior”; mejorar las condiciones financieras de las instituciones de educación superior esperando estimular los ingresos propios de las universidades y adecuar las estructuras y procedimientos académico-administrativos para una mayor eficacia y eficiencia en las funciones.”⁴

Lo anterior, obliga a la siguiente pregunta: ¿piensa el actual régimen y su candidato a la presidencia modernizar al país a partir de la creación de una universidad elitista? Porque el subsidio que reciben hoy las universidades públicas es insuficiente para cubrir las actividades de investigación científica y de extensión de la cultura. Baste recordar que en 1987 el presupuesto de Egresos de la Federación asigna a los gastos educativos el 5% del total general, en tanto que el 56% es para el pago de la deuda; que ni el actual presidente ni su candidato a la presidencia contemplan la posibilidad de dejar pagar la deuda.

Por el contrario, con la firma del Pacto de Solidaridad Económica el presupuesto programado inicialmente para educación disminuyó en 8% y existe la amenaza con posibles recortes posteriores. Recientemente se anunció que “los gastos de operación —de por sí insuficientes— de las 33 universidades públicas sufrirán a lo largo del año un ajuste del 14%”.⁵ De acuerdo con Carlos Imaz, líder del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) de la Universidad Nacional Autónoma de México, el recorte del 14% representa para la institución una reducción de 20 mil millones de pesos “lo que cambiará la relación entre gastos de operación y gastos en salarios de un 18.4 y 81.6—actual—, a un 16.3 y 83.6 por ciento respectivamente”.⁶

Lo cierto es que si se considera que la UNAM se efectúa más del 50% de la poca investigación científica que se realiza en el país, no se puede esperar que frente a la política económica neoliberal del actual régimen nuestro país pueda resolver el problema del atraso técnico y la dependencia tecnológica y así competir a nivel mundial. ¿Cómo lograr la excelencia académica si el recorte al presupuesto de las universidades públicas es parte de esta política neoliberal?

Además en dicha política no se contempla el cese al oneroso pago de la deuda externa y sus intereses y es, precisamente, la deuda externa la que no permitirá al país invertir en la costosa reconversión industrial. Aunado a ello, los 300 empresarios contribuyen en mucho a la inestabilidad económica con la fuga de sus capitales, que día a día crece. La devaluación, la inflación, el desempleo y el férreo control a los salarios son enormes trabas para fortalecer el mercado interno que dicha reconversión requiere.

De ahí que se insista en que una vía real para lograr un avance científico-técnico propio, sin acentuar nuestra dependencia tecnológica y financiera estriba en el impulso que se logre dar al sector educativo en nuestro país.

En un acto de campaña llevado a cabo el día jueves 27 de mayo en Ciudad Universitaria el candidato a presidente por distintas fuerzas de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, señaló muy certeramente que:

“La Universidad pública que hoy tenemos, no responde a un pueblo que lucha por su emancipación económica, condición del ejercicio pleno de la soberanía nacional, no ofrece los conocimientos y las formaciones necesarias. Necesitamos que las universidades públicas sean las mejores del país, no por afán de competencia, sino porque es obligación del Estado y necesidad de la nación. La Universidad pública —añadió— es la que se identifica y la única que cabalmente puede identificarse con los objetivos del proyecto nacional; es la que responde a éste y en esa función no puede ser sustituida; por eso, subordinarla y lesionarla es subordinar y lesionar a la nación y al pueblo mismo en lo más caro, en su soberanía. Hoy al tiempo que los voceros del continuismo reclaman la modernización, con una concepción deformada, en las universidades se pretende aniquilar por la vía presupuestaria toda posibilidad de sentar las bases nacionales para una genuina modernización”.⁷

Efectivamente, la política de reconversión industrial y como la plantea el Estado mexicano —a “medias”—, llevará necesariamente al quiebre a un gran número de empresas ante la incapacidad de competir no sólo en el exterior sino en el mercado interno. Destacará la intensificación de la explotación de los trabajadores, aumento del desempleo y un severo deterioro en el nivel de vida en el que jugará un papel central la inflación, el control a los salarios y el recorte presupuestal. En este contexto, la baja del presupuesto en las universidades públicas amenaza con el *desempleo en las mismas*, más aun cuando la grave crisis que vivimos todavía no toca fondo y el continuismo de la política gubernamental anuncia con sostenerse en el poder, aun en contra de la voluntad de la mayoría del pueblo trabajador.

⁴ *ESTRATEGIA*, revista de análisis político. Publicación bimestral de Publicaciones Sociales Mexicanas. Año XIII, Vol. 1. No. 73, enero-feb 1987, p. 63.

⁵ *La Jornada*, 10 de mayo de 1988, p. 5.

⁶ *La Jornada*, 2 de junio de 1988.

⁷ *La Jornada*, 27 de mayo de 1988, p. 11.